acuerdo de las partes antes de la finalización de aquél, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 157 del Real Decreto 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Quinta. El plazo de garantía es de un (1) año, y comenzará a contarse a partir del día siguiente al de la recepción definitiva del objeto del contrato.

Sexta. Para responder del cumplimiento del presente contrato, ha sido constituida, a favor de la Administración, la garantía definitiva establecida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, por importe de euros (euros), en la Caja de Depósitos, en, según se acredita mediante exhibición en este acto del correspondiente resguardo. Esta garantía no se devolverá hasta cumplido el plazo de garantía ofertado por el adjudicatario y recogido en la cláusula anterior.

Séptima. Se declara expresamente la improcedencia de la revisión de precios, dado que el coste del objeto del presente contrato ha sido calculado teniendo en cuenta el plazo total de ejecución del mismo.

Octava. Para lo no previsto en este contrato, incluidos sus anexos y pliegos, los cuales forman parte de él, se estará a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y en las demás disposiciones complementarias, o que le sean de aplicación, siendo competente la jurisdicción contencioso-administrativa para conocer las cuestiones litigiosas derivadas del mismo.

Para la debida constancia de todo lo convenido, ambas partes firman el presente contrato en triplicado ejemplar en el lugar y fecha al principio citados.

Por la Administración

Por el adjudicatario

RESOLUCION de 13 de junio de 2003, de la Delegación Provincial de Sevilla, dictada en el expediente 99/41/0282 sobre protección de menores, por la que se acuerda ratificar la situación legal de desamparo del menor que se cita.

Nombre y apellidos: D.ª Amalia Ramírez Rosa.

Contenido del Acto.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, y habida cuenta que encontrándose D.ª Amalia Ramírez Rosa en ignorado paradero, no pudiendo, por tanto, haberle sido practicada notificación por otros medios; se publica extracto del acto dictado, por considerarse que la notificación íntegra por medio de anuncios lesionaría los derechos inherentes al menor afectado.

Con fecha 13 de junio de 2003, la Delegación Provincial de Asuntos Sociales de Sevilla, en el expediente de protección de menores arriba señalado, dictó resolución acordando:

Primero. Ratificar la situación legal de desamparo del menor M.S.R., manteniendo asumida en su condición de Entidad Pública de protección de menores la tutela sobre dicho menor.

Segundo. Decretar el cese del acogimiento residencial acordado sobre el citado menor.

Tercero. Constituir el Acogimiento Familiar del citado menor con las personas seleccionadas por esta Entidad Pública.

Cuarto. En cualquier caso, el acogimiento familiar se constituye con carácter preadoptivo y con las condiciones que figuran en el acta de formalización del acogimiento.

Quinto. Ratificar la suspensión cautelar de relaciones familiares del menor acordada por resolución de fecha 5 de julio de 2002.

- Para conocimiento del contenido íntegro de la Resolución dictada, los interesados en paradero desconocido, podrán comparecer en la Delegación Provincial de Asuntos Sociales en Sevilla, sita en C/ Luis Montoto núm. 89, 3.ª planta.

- Contra esta Resolución podrá formularse oposición ante el Juzgado de Primera Instancia (Familia) de esta capital y por los trámites establecidos en los artículos 779 siguientes de la LEC, sin que sea necesario formular reclamación previa en vía administrativa, de conformidad con lo establecido en el artículo 780 de la citada Ley procesal.

- Para la formulación de la citada oposición ante el Juzgado de Primera Instancia, los interesados podrán solicitar ante el Ilustre Colegio de Abogados de esta ciudad, el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita regulado en la Ley 1/996, de 10 de enero, el cual comprende, entre sus prestaciones, la defensa y representación gratuita por el abogado y procurador en el procedimiento judicial cuando la intervención de estos profesionales sea legalmente preceptiva, como ocurre en el presente supuesto. Si el solicitante cumpliera los requisitos que para ello establece la citada Ley, se le reconocerá tal derecho de gratuidad. En caso contrario estará obligado a abonar los honorarios y derechos económicos ocasionados por la intervención de los profesionales designados.

Sevilla, 13 de junio de 2003.- El Delegado, Francisco Obregón Rojano.

4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NUM. ONCE DE SEVILLA

*EDICTO dimanante del procedimiento ordinario
num. 1547/2002. (PD. 2590/2003).*

NIG: 4109100C20020046153.

Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 1547/2002. Negociado: 67.

Sobre: Reclamación de cantidad.

De: Construcciones Conez, S.L.

Procuradora: Sra. Macarena Pulido Gómez.

Contra: Servicios y Construcciones Andalucía Secoan, S.L.

Hago saber: Que en el procedimiento Proced. Ordinario (N) 1547/2002 seguido en el Juzgado de Primera Instancia número Once de Sevilla, a instancia de Construcciones Conez, S.L., contra Servicios y Construcciones Andalucía Secoan, S.L., se ha dictado la sentencia que copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NÚM.

En la ciudad de Sevilla, 20 de febrero de 2003.

Vistos por el Ilmo. Sr. don Francisco Berjano Arenado, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número Once de esta ciudad los presentes autos número 1547/02, de juicio ordinario sobre reclamación de cantidad, seguidos entre partes, de la una como demandante Construcciones Conez, S.L. representado por la Procuradora de los Tribunales doña Macarena Pulido Gómez y defendido por el Letrado don Wenceslao Moreno de Arredondo, contra la mercantil Servicios y Construcciones de Andalucía Secoan, S.L., en situación procesal de rebeldía.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Por el referido Procurador en nombre y representación de su mandante, formuló demanda de juicio declarativo de Cognición, con base a los hechos que enumeradamente exponía, y que aquí se dan por reproducidos en aras de la brevedad y hacia alegación de los fundamentos de derecho que entendía aplicables al caso, y finalizaba con la súplica al Juzgado de que tras su legal tramitación finalizara, dictándose sentencia por la que se condenase al demandado a que abonase a su representado la suma de 193.336,40 euros, y al pago de los intereses legales y costas.

Segundo. Admitida a trámite la demanda se dio traslado de la misma a la parte demandada para que en el término legal compareciera en autos y contestara la demanda, bajo apercibimiento de rebeldía en la que fueron declarados, convocándose a las partes al acto de audiencia previa prevista en la Ley, al que ha comparecido únicamente la parte actora admitiéndose tan sólo como prueba la documental, por lo que quedaron los autos conclusos para dictar sentencia.

Tercero. En la tramitación de los presentes autos se han observado, en esencia, las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Primero. Se formula demanda por la parte actora en reclamación de determinada cantidad de dinero que dice le adeuda la parte demandada, con la que tiene suscrito un contrato de obra, la cual no ha hecho efectivo el importe de la porción

de obra ejecutada en los meses de marzo a octubre de 2002 y las reformas realizadas en las viviendas construidas en la calle Pureza 104 de esta capital.

Segundo. De la documental aportada con la demanda, que no ha sido impugnada ni cuestionada por la demandada expresamente al estar en situación de rebeldía, se desprende cómo la actora procedió a ejecutar durante los meses referidos en el fundamento anterior la obra pactada.

Como precio y forma de pago se concertó en la cláusula segunda del contrato de obra suscrito por las partes (documento número 18 de la demanda) que se confeccionaría conjuntamente entre el responsable técnico de cada una de las partes una certificación al final de cada mes. Este documento debía ser examinado, conformado y firmado por la propiedad antes del día 30 de cada mes, reteniendo ésta un 5% en cada certificación.

La parte demandante aporta con la demanda las certificaciones de la ejecución de la obra cuyo importe se exige (documentos 1 al 8 de la demanda), apareciendo en las mismas la firma del contratista, la dirección facultativa y la propiedad, efectuándose la liquidación de la obra de la manera pactada y señalada en el párrafo anterior.

Por otra parte, también exige la actora, conforme a lo estipulado en la cláusula novena del contrato de arrendamiento de obra suscrito, el importe de las reformas que realizó en las viviendas ejecutadas en la obra. Aporta como prueba el presupuesto de las citadas mejoras, con la aprobación y firma de la propiedad, su responsable técnico y la demandada (documento número 9 de la demanda) y el detalle de las reformas individuales que se ejecutaron en cada vivienda (documentos 10 al 17).

Como consecuencia de lo anterior, habiendo probado la actora la existencia de la deuda y no aportando la demandada a las actuaciones al encontrarse en rebeldía prueba en contrario que desvirtúe dicha existencia o que constate el pago de la deuda, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 1.089, 1.091, 1.100, 1.125, 1.254, 1.255, 1.256, 1.257, 1.544 y 1.599 del Código Civil, la demanda origen de autos debe ser íntegramente estimada.

Tercero. Conforme a los arts. 1.101, 1.106, 1.108 y 1.109 del Código Civil la suma reclamada devengará el interés legal desde la fecha de emplazamiento.

También será aplicable el interés recogido en el art. 576 Ley de Enjuiciamiento Civil desde la fecha de la presente resolución.

Cuarto. Conforme al art. 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil las costas serán de cuenta de la parte demandada.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación.

FALLO

Que estimando íntegramente la demanda formulada por la Procuradora de los Tribunales doña Macarena Pulido Gómez en nombre y representación de Construcciones Conez, S.L., debo condenar y condeno a la Entidad Servicios y Construcciones de Andalucía Secoan, S.L., en situación procesal de rebeldía, a que abone a aquélla la cantidad de ciento noventa y tres mil trescientos treinta y seis euros con cuarenta céntimos (193.336,40 euros) con más los intereses devengados por dicha suma desde la fecha del emplazamiento y, todo ello, con expresa imposición de las costas a la parte demandada.